



## TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

### SALA LABORAL

Medellín, junio 30 de 2021

Radicado: 05001-31-05-**005-2016-01078- 01**  
Demandante: MARGARITA MARÍA PACHECO DE VERGEL  
Demandado: AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA SA - AVIANCA  
Asunto: APELACIÓN CONTRA SENTENCIA  
Tema: INCREMENTO ANUAL DE LA MESADA

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia. Decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

### ANTECEDENTES

A través de la acción judicial la activa planteó la solicitud de indexación de la mesada pensional reconocida a la actora, aplicando la variación del IPC, desde el año 1978 hasta la sentencia. El A quo, tras identificar que la mesada de jubilación que disfrutaba Amílcar Vergel fue concedida el día inmediatamente posterior a la desvinculación laboral, explicó que no se presentan los presupuestos para la indexación de la primera mesada, ya que el paso entre las datas enunciadas (desvinculación y reconocimiento pensional) no generó desactualización del poder adquisitivo del dinero.

Bajo esta premisa, verificó si la mesada tal como fue reconocida se ha venido ajustando anualmente, por lo que procedió al estudio del comportamiento de la prestación reconocida, resaltando que conforme a las premisas de la Ley 4 de 1976 no habría lugar a predicar un aumento para el año 1979, concluyendo que el valor de la mesada supera aquel que arrojaron sus cálculos, por tanto, no existe un déficit o saldo insoluto, absolviendo de todas las pretensiones a la activa.

Decisión recurrida por la activa, quien de forma escasa y sin indicar algún ataque específico a la decisión del A quo, en términos generales narró que el reajuste pensional es un derecho de rango constitucional y cuestionó la justeza del valor de la mesada, ya que para el año 2018, corresponde a 4.3 veces el SMLMV, pero en su génesis, año 1978, era de 12.8 SMLMV.

### ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, **la accionada** presentó escrito que enuncia como alegatos de conclusión, sin embargo, el mismo contiene reproches a la sentencia de primera instancia, los que no fueron expuestos en el momento de sustentación del recurso de apelación, sin que sea la etapa de alegatos de conclusión una extensión de tal oportunidad para complementar aquellos aspectos omitidos.

Fue así que la activa refirió que la mesada pensional no refleja los aumentos dispuestos por las leyes 4 de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993 y presentó una serie de cuestionamientos que pretende sean resueltos en segunda instancia, aspectos que como se indicó, no fueron expuestos en la sustentación del recurso de apelación y por tanto no demarcan la senda de análisis de esta corporación, atendiendo a lo reglado por el artículo 328 del CGP que señala que la decisión de segunda instancia guardará consonancia con los aspectos de apelación.

A su turno **la demandada** expresó que la pensión fue concedida en el año 1978 y su actualización se ha surtido conforme a las normas que han regulado la materia,

iniciando con la Ley 4 de 1976, luego la Ley 71 de 1988 y por último la Ley 100 de 1993, generándose en el caso en cuestión, un aumento aún superior al dispuesto por Ley.

### CONSIDERACIONES

Previo a resolver los aspectos objeto de apelación encuentra la Sala pertinente expresar que en el presente evento se encuentran por fuera de discusión: **1)** Que el 15 de diciembre de 1951 Amílcar Vergel Cabrales y María Margarita Pacheco Jaramillo contrajeron matrimonio (fl. 24), **2)** Que mediante acuerdo conciliatorio celebrado entre Amílcar Vergel Cabrales y la empresa Aerovías Nacionales de Colombia SA – Avianca y autorizado por el Juzgado 8 Laboral de Medellín de octubre de 1978 se pactó el reconocimiento de una pensión extralegal, en cuantía de \$33.017 (valor superior al salario mínimo legal) pagadera al señor Vergel Cabrales partir del 15 de junio de 1978, a convertirse en prestación definitiva en los términos del artículo 260 del CST, una vez aquel llegara a los 55 años de edad, esto es el 5 de mayo de 1981 (acuerdo de conciliación obrante a folio 28/29 y edad informada en el registro civil de defunción fl. 26) y **3)** Que el 11 de junio de 1994 falleció el jubilado Amílcar vergel Cabrales (fl. 26) y en virtud de ello le fue reconocida la sustitución pensional a la demandante (fls. 31, 89, y 109)

En este orden de ideas, atendiendo a los aspectos que fueron materia de litigio y de apelación, le corresponde a esta Corporación determinar si existe un déficit en el valor de la mesada pensional que recibe la señora Pacheco de Vergel, producto de una indebida actualización de la mesada año tras año, análisis al que se llegará previas precisiones relativas a la diferencia entre los conceptos de indexación de primera mesada y reajuste anual de la prestación, la que resulta necesaria para desatar esta instancia, en tanto la activa hace alusión indistinta a uno y otro.

Pues bien, en cuanto al primer concepto, ***indexación***, su esencia es hacer frente a los efectos de la inflación que genera disminución de la capacidad adquisitiva del dinero y en el campo pensional, cuando se trata de ***indexación de la primera mesada***, es un

mecanismo para garantizar la actualización del salario base para liquidación de la primera mesada pensional, cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el momento en que el trabajador se retira de su trabajo y el reconocimiento de la pensión, ajuste que conforme al criterio actual de la jurisprudencia constitucional y de la Sala de Casación de la CSJ irradia a prestaciones concedidas antes y después de la vigencia de la Constitución de 1991 (al respecto la sentencia SU 120 de 2003, C 862 de 2006, T 457 de 2009, sentencias CSJ SL2146-2017, CSJ SL 5088 de 2020, entre otras)

En lo que refiere a la **actualización anual de la mesada**, comporta un derecho de rango constitucional, en tanto el artículo 48 constitucional reza “...la ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante” cometido constitucional desarrollado a través del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, previendo la necesidad aplicar un aumento a la mesada pensional el 1° de enero de cada año bajo dos modalidades, **1)** Equivalente a la variación del IPC para las prestaciones en cuantía superior a 1 SMLMV y **2)** en la misma proporción de aumento al salario mínimo legal, para las mesadas de tal monto.

Se trata pues de criterios diferentes, en tanto el primero busca que el valor inicial de la prestación tenga idéntica capacidad adquisitiva que los valores que sirvieron de base para su composición sin depreciación por el paso del tiempo, mientras que la actualización anual, realiza un ajuste periódico, acorde a los cambios económicos, al respecto la sentencia T - 255 de 2013 indicó:

*“En efecto, la diferencia entre una y otra radica en que, la indexación, tal como se dejó dicho en la parte considerativa de esta sentencia, busca atacar los efectos de la inflación y permitir que el valor de la pensión en el momento en que se adquirió con relación al momento en que se reconoce, efectivamente tenga la misma capacidad adquisitiva; mientras que el reajuste es determinado por la ley para incrementar o aumentar el valor o precio de la mesada por razones distintas a la inflación, como es la de presentar diferencias con los aumentos del salario mínimo legal mensual vigente”.*

La anterior precisión es pertinente en tanto desde el auto que devolvió la demanda, se requirió a la demandante para que precisara si sus súplicas estaban dirigidas a obtener un reajuste de la prestación producto de la indexación del salario base de liquidación o de la mesada pensional (fl. 33), a cual indicó que su cometido era *“indexar correctamente el valor de la mesada pensional de la señora María Margarita Pacheco de Vergel, como conyuge (sic) supérstite del señor Amílcar Vergel Cabrales, de acuerdo al índice de precios al consumidos publicado por el DANE...”* (fl. 36), de donde el A quo señaló que el litigio tendría por propósito definir si había lugar a la actualización anual de la mesada de acuerdo al IPC, mismo aspecto que fue objeto de decisión. (audiencia del 20 de junio de 2018 – fls. 103/105)

Empero, la activa dentro de la etapa de alegaciones, además de pretender complementar la sustentación del recurso de apelación, señaló como criterios jurisprudenciales aplicables las sentencias SU 1073 de 2013 y CSJ SL 736 de 2013, las que, pese a contextualizar su análisis desde el derecho a la mantener el poder adquisitivo de las pensiones, centran sus argumentos en la procedencia de la indexación de la primera mesada por actualización de los salarios que se ponderan para componer la prestación, en aquellos supuestos causados antes de la Constitución de 1991, análisis ajeno al acá planteado y por tanto sus dichos no comportan un referente o precedente para la decisión en esta instancia. .

En efecto, en este evento el análisis no se enmarca dentro de la senda de la indexación de la primera mesada, en tanto no hubo una devaluación de la moneda entre la fecha de cesación de la relación laboral y el reconocimiento pensional, por cuanto la pensión extralegal reconocida al finado Amílcar Verger Cabrales se produjo al día siguiente de la desvinculación laboral, concomitancia que a juico de la Sala de Casación Laboral de la CSJ no genera perjuicio, ni resarcimiento en favor del pensionado (al respecto SCJ SL 1945 de 2021, que reseña entre otras SL 700 de 2021, SL 2880 de 2019, SL 3191 de 2018, entre otras)

Ahora bien, en lo atinente al reajuste anual de la mesada, como se indicó, busca que la pensión como prestación de tracto sucesivo, no se rezague en su ingrediente económico, aplicando un alza anual con la finalidad de mantener constante su poder adquisitivo y evitar que se genere un desequilibrio económico; medida de actualización consagrada en el artículo 48 de la Carta fundamental y opera para todas las pensiones, inclusive las causadas con antelación al régimen de seguridad social integral y la Constitución de 1991, dado el efecto global que tienen estas normas frente a derechos mínimos del pensionado (al respecto las sentencias CSJ SL6489-2015, SL 4204 de 2017, SL 1295 de 2021 entre otras).

Reajuste pensional que previo a la entrada en vigencia del sistema general en pensiones se hallaba regulado en la Ley 4 de 1976 y Ley 71 de 1988, consagrando a su turno un incremento que combinaba un monto que correspondía a la diferencia entre los salarios anteriores y reajustados, más el porcentaje de incremento del salario mínimo (ley 4 de 1976<sup>1</sup>), ora un ajuste en la misma proporción al salario mínimo legal (Ley 71 de 1988 <sup>2</sup>) y que se aplicaron en vigencia de cada precepto, ya que con ocasión a la expedición de la Ley 100 de 1993, con efectos para todos los regímenes pensionales y derogatoria de las normas que le fueran contrarias, el reajuste de las mesadas se somete a las reglas de tal régimen, como se indicó bajo dos parámetros:

---

<sup>1</sup> **Ley 4 de 1976, ARTICULO 1o.** Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales a excepción de las pensiones por incapacidad permanente, parcial se reajustarán de oficio, cada año, en la siguiente forma:

Cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más alto, se procederá como sigue: con una suma fija igual a la mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, más una suma equivalente a la mitad del porcentaje que represente el incremento entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, esto último aplicado a la correspondiente pensión.

<sup>2</sup> **Ley 71 de 1988, ARTICULO 1o.** Las pensiones a que se refiere el artículo 1o. de la Ley 4a. de 1976, las de incapacidad permanente parcial y las compartidas, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual.

1) Equivalente a la variación del IPC reportado por el DANE para las prestaciones en cuantía superior a 1 SMLMV y 2) en la misma proporción de aumento al salario mínimo legal, para las mesadas de tal monto.

Así indicó la Corte constitucional en sentencia C 110 de 2006 relativo a la forma como operan los reajustes en pensiones previas a la Ley 100 de 1993:

*Así las cosas, en el entendido que las normas laborales son por expresa disposición legal de orden público y de aplicación inmediata (C.S.T. art. 16), se tiene que la fórmula de reajuste pensional contenida en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, estuvo vigente y produjo efectos jurídicos solo hasta la entrada en vigencia de la Ley 71 de 1988, hecho éste que tuvo ocurrencia el día 19 de diciembre de ese mismo año tal y como aparece registrado en el Diario oficial no. 38.624 del 22 de diciembre de 1988. Por tanto, el reajuste conforme al promedio que resultara entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, previsto en el artículo 1º de la Ley 4 de 1976 y cuestionado por el actor, sólo rigió hasta el año de 1988.*

*A partir del 1º de enero de 1989 y hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, todas las pensiones que fueron reconocidas en el país, tanto en el sector público como en el privado, se reajustaron anualmente conforme a la fórmula prevista en la Ley 71 de 1988, esto es, en el mismo porcentaje en que se incrementó por el Gobierno el salario mínimo legal mensual. Con la expedición de la Ley 100 de 1993 y su entrada en vigencia, las pensiones reconocidas antes y después de dicha ley, se vienen reajustando en la forma prevista por su artículo 14 y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 142 y 143 ibídem, lo que significa que el referido reajuste se produce anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, más la mesada adicional y el reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud, a favor de los pensionados con anterioridad al 1º de enero de 1994.[...].*

*(...)*

*De lo anterior se concluye que, en la actualidad, a los pensionados bajo la vigencia de la ley 4ª de 1976 no se les reajusta la pensión con base en dicha ley, como equivocadamente lo sostiene el demandante, sino que, al igual que todos los demás pensionados, el reajuste se lleva a cabo siguiendo la formula prevista en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes. (Subrayado fuera del texto).*

Modulación en el sistema de actualización pensional que a juicio de la Corte Constitucional no comporta un ejercicio irracional de la norma en menosprecio del postulado de favorabilidad, por cuanto la carta fundamental consagró la prerrogativa de aumento periódico de la prestación y delegó al legislador determinar la fórmula para conseguirlo y a su turno a Ley 100 de 1993, para ajustar las pensiones cuya cuantía sea superior a 1 SMLMV, fijó como parámetro el comportamiento del IPC como criterio estadístico que mide la variación porcentual de los precios de un conjunto representativo de los bienes y servicios de consumo de los hogares del país<sup>3</sup>, que no coincide con el incremento del salario mínimo, el que se establece de forma concertada con los gremios de trabajadores o por imposición del Gobierno Nacional; sobre este asunto indicó la Corte Constitucional en sentencia C 435 de 2017:

*“Por ende, la Corte debe llamar la atención sobre el hecho de que tampoco es correcto decir que el indicador de la capacidad de compra o poder adquisitivo corresponde a la relación entre el ingreso y el salario mínimo, como afirma el accionante, pues por definición es el IPC la medida para establecer la capacidad de compra, lo que justifica, desde el punto de vista técnico, que de manera general éste se utilice como parámetro para la actualización de las pensiones. Mientras que, como bien lo explicó Asofondos, el salario mínimo “no mide el mantenimiento del poder adquisitivo del dinero ni de los recursos destinados a pensiones”, que es el fin o propósito que, a manera de condición, se fija en el artículo 48 constitucional.*

*Por lo tanto, se concluye que además de que la propia Constitución faculta al legislador a decidir, con autonomía política, de qué manera reajustar periódicamente el valor pensiones, de tal forma que no hay lugar aquí para la aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral del que trata el artículo 53 superior, en todo caso los índices o referencias de actualización a los que acudió el legislador para actualizar las pensiones de forma diferenciada según su valor (IPC y SMLMV) tienen un origen, una explicación y unos propósitos diferentes, al mismo tiempo que se relacionan entre ellos de una forma particular”.*

---

<sup>3</sup> El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. El dato del IPC, en Colombia, lo calcula mensualmente el [Departamento Administrativo Nacional de Estadística \(DANE\)](https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/indice-precios-consumidor-ipc). Obtenido de la página web <https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/indice-precios-consumidor-ipc>



Con estas premisas, se descende **al caso concreto**, y se verifica que la prestación que sucedió la señora Pacheco de Vergel corresponde a la pensión de jubilación concedida a su esposo Amílcar Vergel a partir del 15 de junio de 1978 como prestación extralegal y a partir del 5 de mayo de 1981 como pensión de cara al Código Sustantivo del Trabajo (así lo indica el acta de conciliación fls. 28/29), derecho que dado su génesis se halla sujeto a los ajustes que temporalmente fueron reglados por las Leyes 4 de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993, que para el presente caso operaron, así:

1. En cuantía inicial de \$33.017,87 (promedio del último año de servicio fls. 109 y 120) que para el año 1979 no se reajusta, ya que la Ley 4 de 1976 establecía como premisa del alza haber consolidado el derecho pensional con un año de anticipación al reajuste<sup>4</sup>, condición que no se cumple en tanto se generó a partir del 15 de junio de 1978.
2. Entre los años 1980 a 1988, el alza respondía a la fórmula indicada por la Ley 4 de 1976, esto es “...con una suma fija igual a la mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, más una suma equivalente a la mitad del porcentaje que represente el incremento entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, esto último aplicado a la correspondiente pensión”.
3. Desde del 1° de enero de 1988 en la misma proporción de incremento del salario mínimo.
4. Desde el 1° de enero de 1995 bajo las reglas del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, esto es en la misma proporción de la variación del IPC.

Reglas que aplicada al caso concreto arrojan los siguientes valores:

---

<sup>4</sup> Ley 4 de 1976, artículo 1 PARAGRAFO 2o. Los reajustes a que se refiere este artículo se harán efectivos a quienes hayan tenido el status de pensionado con un año de anticipación a cada reajuste.

Año	Salario mínimo del año anterior	Salario mínimo de la anualidad	Mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto	% incremento salario mínimo y a partir del 1995 % de variación del IPC	Mitad del porcentaje que represente el incremento entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto	Mesada pensional
1978	\$ 2.340	\$ 2.580	\$ 120	10,26%	5,13%	\$ 33.018 <sup>5</sup>
1979	\$ 2.580	\$ 3.450	\$ 435	33,72%	16,86%	\$ 33.018 <sup>6</sup>
1980	\$ 3.450	\$ 4.500	\$ 525	30,43%	15,215%	\$ 38.567
1981	\$ 4.500	\$ 5.700	\$ 600	26,67%	13,335%	\$ 44.310
1982	\$ 5.700	\$ 7.410	\$ 855	30%	15%	\$ 51.811
1983	\$ 7.410	\$ 9.261	\$ 926	24,98%	12,49%	\$ 59.208
1984	\$ 9.261	\$ 11.298	\$ 1.019	22%	11%	\$ 66.739
1985	\$ 11.298	\$ 13.557	\$ 1.130	20%	10%	\$ 74.542
1986	\$ 13.557	\$ 16.811	\$ 1.627	24,01%	12,005%	\$ 85.118
1987	\$ 16.811	\$ 20.510	\$ 1.850	22%	11%	\$ 96.331
1988	\$ 20.510	\$ 25.637	\$ 2.564	25%	12,5%	\$ 110.936
1989	Se aplican las reglas de la Ley 71 de 1988, que prevé un incremento en el mismo porcentaje de variación del salario mínimo legal mensual vigente			27%		\$ 140.889
1990				26%		\$ 177.520
1991				26,1%		\$ 223.853
1992				26,04%		\$ 282.144
1993				25,03%		\$ 352.765
1994				21,1%		\$ 427.198
1995	Variación del IPC + 4% como reajuste por la cotización en salud			26,59%		\$ 540.791
1996	Incremento conforme a la variación del IPC certificada por el DANE, disponible en la página web de la entidad			19,46%		\$ 646.028
1997				21,63%		\$ 785.764
1998				17,68%		\$ 924.687
1999				16,7%		\$ 1.079.110
2000				9,23%		\$ 1.178.712
2001				8,75%		\$ 1.281.849
2002				7,65%		\$ 1.379.911
2003				6,99%		\$ 1.476.367
2004				6,49%		\$ 1.572.183
2005				5,5%		\$ 1.658.653
2006				4,85%		\$ 1.739.098
2007				4,48%		\$ 1.817.009
2008				5,69%		\$ 1.920.397
2009				7,67%		\$ 2.067.691
2010				2%		\$ 2.109.045
2011				3,17%		\$ 2.175.902
2012				3,73%		\$ 2.257.063
2013				2,44%		\$ 2.312.136
2014				1,94%		\$ 2.356.991
2015				3,66%		\$ 2.443.257
2016				6,77%		\$ 2.608.665

<sup>5</sup> Mesada inicial

<sup>6</sup> Mesada que no se ajusta en los términos de la Ley 4 de 1976

Comparados estos valores, con los certificados por la entidad accionada como mesada pagada hasta el año 2008 (fls.99 y 110) llevan a concluir que hasta tal data no existe valor insoluto producto de un indebido ajuste anual de la mesada, y por el contrario se evidencia que la suma reconocida aplica unos ajustes superiores a los reglados, sin que sea posible predicar un pago deficitario en fechas posteriores, pues tal como lo indica la accionada en el hecho 5 de la demanda (fl. 2/3) el valor reconocido para el año 2016 fue de \$3'066.976, esto es superior al hallado con los cálculos referidos, que lo fue de \$2'608.665

Destaca la sala que el cálculo aducido por la activa en el escrito de demanda (fls. 2/3) parte de un error, cual fue aplicar de forma simple la variación del IPC a cada anualidad, desconociendo así las reglas ya mencionadas, error inicial que afecta los cómputos posteriores y permite a la sala desacreditar las premisas y conclusiones de la activa.

Ahora bien, si en gracia de discusión se resolvieran los cuestionamientos expuestos en los alegatos de conclusión, a la misma consecuencia absolutoria se llegaría, toda vez que sus premisas no son ciertas, en tanto no se aprecia de la accionada un actuar inequitativo o irracional en desmedro de los intereses de la accionante, por el contrario, la pagadora de la pensión se ha ajustado a las normas, que producto del comportamiento de la economía nacional, pese a realizarse ajustes anuales para contrarrestar los efectos de la inflación, inevitablemente se ha producido un encarecimiento de los productos que no logra compensarse con el aumento de salarios y pensiones, efecto que irradia a todos los ciudadanos.

Pretender un incremento diferente para el caso analizado, implicaría desconocer sin fundamento alguno las normas y criterio jurisprudencial elaborado sobre la materia, al igual que un evidente quebrantamiento del postulado de igualdad respecto a la totalidad de pensionados a quienes se les ha aplicado de forma histórica el mismo criterio de actualización de la mesada.

Así las cosas, al no acreditarse los presupuestos de las pretensiones de la activa y no hallarse un pago deficitario de la mesada pensional, no existe mérito para imponer condena alguna, conclusión expuesta por el A quo y que se confirma en esta instancia.

En los términos expuestos quedan resueltos los aspectos de apelación. Costas en ambas instancias a cargo de la activa, en esta se tasan las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**, confirma de forma total la sentencia recurrida.

Costas en ambas instancias a cargo de la activa, en esta se tasan las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

  
**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**

  
**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**

  
**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados N° 114 publicados por medios digitales el 1° de julio de 2021